

**“Análisis proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de mejorar la persecución del narcotráfico y crimen organizado, regular el destino de los bienes incautados en esos delitos y fortalecer las instituciones de rehabilitación social.”**

**I.- Introducción.**

El presente trabajo tiene como objetivo en primer término dar cuenta de los fundamentos y la tramitación legislativa del proyecto de ley ingresado vía moción parlamentaria a la Honorable Cámara de Diputadas y Diputados, el 9 de julio de 2019, denominado “Dispone la extinción del dominio sobre los productos e instrumentos del delito, en los casos y en la forma que indica”, Boletín N° 12776-07, refundido con los proyectos de ley números de boletín 11915-07, 12668-07 y 13588-07 y cuya autoría corresponde a los diputados de la época René Alinco, Hugo Gutiérrez, Jaime Mulet, Daniel Nuñez, René Saffirio, Alejandra Sepúlveda, Leonardo Soto, Guillermo Tellier, Esteban Velásquez y Matías Walker.

Este proyecto de ley es relevante considerarlo, ya que es el origen o fundamento del proyecto de ley objeto de estudio de este informe, siendo su idea matriz “regular la recuperación de activos adquiridos por actividades ilícitas a través del establecimiento de la institución de extinción del dominio, o decomiso sin condena.”

En el transcurso de la tramitación legislativa de este proyecto de ley iniciado por moción, el gobierno del Presidente Sebastián Piñera, ingreso un proyecto de ley el 16 de junio de 2020 a la H. Cámara de Diputadas y Diputados, boletín N° 13588-07, mediante el cual plantea modificar diversos cuerpos legales con el objeto de mejorar la persecución del narcotráfico y crimen organizado, regular el destino de los bienes incautados en esos delitos y fortalecer las instituciones de rehabilitación social.

El objetivo principal de este proyecto de ley del ejecutivo, objeto de estudio de este informe, es combatir el narcotráfico y el crimen organizado.

Como veremos en el siguiente capítulo, este proyecto de ley fue refundido con los proyectos de ley señalados anteriormente.

En consideración a la extensa tramitación legislativa que ha tenido el proyecto de ley materia del presente informe, trayendo ello como consecuencia varias modificaciones relevantes con respecto al texto original del mensaje presidencial, en el tercer capítulo del presente informe, analizaré el contenido del texto final del proyecto de ley, que el pasado 14 de marzo terminó su tramitación legislativa al ser aprobado por la Sala del Senado el informe de la Comisión Mixta, mismo informe que fuera aprobado el día anterior por la Sala de la H. Cámara de Diputadas y Diputados.

Por último mediante Oficio N° 18.150 de fecha 17 de marzo del presente, del Presidente de la H. Cámara de Diputadas y Diputados dirigido a S.E. el Presidente de la República, se remitió el texto del proyecto de ley aprobado por el Congreso Nacional.

Al final del trabajo, en el capítulo IV, expondré una serie de consideraciones finales, que abordarán los aspectos más relevantes de este proyecto de ley aprobado por el Congreso.

Fuentes del capítulo: Página web de la Honorable Cámara de Diputadas y Diputados; Proyecto de ley boletín Nº 12776-07 denominado “Dispone la extinción del dominio sobre los productos e instrumentos del delito, en los casos y en la forma que indica”; Proyecto de ley boletín Nº 13588-07 denominado “que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de mejorar la persecución del narcotráfico y crimen organizado, regular el destino de los bienes incautados en esos delitos y fortalecer las instituciones de rehabilitación social”; Oficio Nº 18.150 de fecha 17 de marzo del presente, del Presidente de la H. Cámara de Diputadas y Diputados dirigido a S.E. el Presidente de la República.

**II.- Tramitación legislativa de la moción parlamentaria que dispone la extinción del dominio sobre los productos e instrumentos del delito, en los casos y en la forma que indica”, boletín Nº 12776-07 y del mensaje del ejecutivo que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de mejorar la persecución del narcotráfico y crimen organizado, regular el destino de los bienes incautados en esos delitos y fortalecer las instituciones de rehabilitación social, boletín Nº 13588-07.-**

Tal como anuncié en la introducción, en esta primera parte del informe describiré los fundamentos del proyecto de ley original y la extensa tramitación legislativa que ha tenido tanto en la Honorable Cámara de Diputadas y Diputados como en el Senado de la República este proyecto que luego fue refundido con el proyecto de ley del ejecutivo.

En efecto, como se señala en la introducción, el proyecto de ley vía moción parlamentaria ingresó a la Honorable Cámara de Diputadas y Diputados el día 9 de julio de 2019.

Es importante en primer término referirse a los aspectos fundamentales del proyecto de ley en su origen.

El fundamento principal del proyecto de ley dice relación con combatir el narcotráfico, ya que esta actividad ilícita supone una gran acumulación de riqueza por parte de las personas que se dedican a ella, siendo en consecuencia muy atractivo desde el punto de vista patrimonial.

El proyecto además señala la carencia en Chile de una normativa que regule lo que la doctrina denomina “la extinción del dominio”, la cual originalmente proviene del derecho inglés y que se ha desarrollado en latinoamérica siendo Colombia el país precursor de ella.

El proyecto de ley original, señala textualmente que la extinción del dominio supone “iniciar un proceso ante un tribunal civil, en el que los requisitos probatorios son menos estrictos que en el ámbito penal, siendo suficiente para decretar el comiso con que exista un elevado nivel de probabilidades de que los bienes tengan origen delictivo”.

Además señala el proyecto que este proceso civil trae beneficios al proceso penal en el sentido que “evita también que difíciles cuestiones relacionadas con la investigación del patrimonio criminal o que se generen en relación con la propiedad de los bienes obstaculicen y ralenticen el proceso principal dirigido a la determinación de las responsabilidades penales y viceversa”.

La moción parlamentaria se refiere también a que el comiso en nuestro país, entendido como “la posibilidad de recuperar bienes resultantes de la comisión del delito” está regulado solamente en el ámbito penal, limitándose en el artículo 31 del Código Penal a la necesidad que exista una condena para que aplique.

En efecto, el artículo referido señala textualmente que: “Toda pena que se imponga por un crimen o simple delito, lleva consigo la pérdida de los efectos que de él provengan y de los instrumentos con que se ejecutó, a menos que pertenezcan a un tercero no responsable del crimen o simple delito.”

Si bien el comiso cuenta en otras leyes con ciertas algunas regulaciones específicas, como por ejemplo la ley N° 20.000 que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, mantiene la exigencia de obtener una sentencia condenatoria en los delitos regulados en dicha ley para poder decretar el decomiso de los bienes.

En definitiva lo que plantea el proyecto, es la necesidad de contar con un proceso civil paralelo al proceso penal que permita recuperar de manera eficiente los bienes producto de los delitos.

De esta manera el comiso sería un instrumento jurídico de prevención general, dirigido a desincentivar y desestimular las actividades delictivas, especialmente de aquellas de motivación económica como el narcotráfico.

Por último y tal como lo señala la moción “el proyecto de ley crea la institución de la extinción del dominio basado en la Ley Modelo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito a través de un articulado independiente de otro cuerpo legal. En consecuencia, no modifica disposición alguna de la legislación vigente”.

En efecto, el proyecto de ley cuenta con 47 artículos en los 9 capítulos que señala que contiene, no obstante lo anterior, es importante hacer presente que en el articulado no existe un capítulo VII, incurriendo en un error en este sentido la moción parlamentaria.

El Capítulo I se denomina “Aspectos generales”; el Capítulo II “Garantías procesales”; el Capítulo III “Aspectos procesales”; el Capítulo IV “Procedimiento”; el Capítulo V “Pruebas”; Capítulo VI “Administración y destinación de los bienes”; Capítulo VIII “Cooperación internacional” y el Capítulo IX “Disposiciones finales”

Luego del ingreso del proyecto a la Honorable Cámara de Diputadas y Diputados el día 9 de julio de 2019, el día 17 del mismo mes se dio cuenta en la sala y pasó a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de dicha corporación.

Además en esa misma fecha se remitió el proyecto de ley a la Excma. Corte Suprema, mediante Oficio N° 14.871 suscrito por el Presidente de la época de la Corporación diputado don Iván Flores García dirigido al Presidente de la Excma. Corte Suprema, el cual en su parte pertinente señala textualmente lo siguiente: “En conformidad con lo dispuesto en los incisos segundo y tercero del artículo 77 de la Constitución Política de la República, en relación con el artículo 16 de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, tengo a honra remitir a esa Excma. Corte Suprema copia del proyecto de ley, iniciado en moción, que dispone la extinción del dominio sobre los productos e instrumentos del delito, en los

casos y en la forma que indica, correspondiente al boletín N° 12.776-07, con el objeto de que se pronuncie respecto de lo dispuesto en su artículo 20.”

El artículo 20 del proyecto de ley , correspondiente al primer artículo del Capítulo IV denominado “Procedimiento” señalaba textualmente que: “Etapas. El procedimiento consta de dos etapas: una fase inicial o preprocesal que estará a cargo del Ministerio Público, y una fase procesal a cargo del juez de garantía que se iniciará a partir de la presentación de la pretensión de extinción de dominio.”

La respuesta de la Excma. Corte Suprema fue mediante el Oficio N° 193-2019, de fecha 4 de septiembre de 2019, suscrito por el Presidente de la época del máximo tribunal, don Haroldo Brito Cruz, siendo negativa respecto el artículo consultado, ya que si bien, considera que el proyecto de ley es positivo que aborde este tema, no se determina la naturaleza de la acción de extinción del dominio sobre los productos e instrumentos del delito, esto es si proviene de la emanación del ius puniendi o corresponde a una acción civil, en consecuencia no se puede determinar si es pertinente o no que el procedimiento se regule en sede penal, ello mientras no se determine si esta nueva acción es de naturaleza civil o penal.

Pese a que el Oficio de la H. Cámara de Diputadas y Diputados, no consultaba sobre otras normas del proyecto, sino que solamente respecto al artículo referido, la Excma. Corte Suprema, estimo hacer una serie de cuestionamientos a otras normas del proyecto de ley, en razón que afectan las facultades y atribuciones de los tribunales.

Por último es importante citar un párrafo del oficio de respuesta de la Excma Corte Suprema, el cual resume de cierta manera el fondo de la respuesta al señalar que: “Cabe tener en cuenta que el proyecto tanto en su articulado como en su redacción, es prácticamente idéntico al ofrecido como parámetro en la “Ley Modelo sobre Extinción de Dominio”, del Programa de Asistencia Legal para América Latina y el Caribe, con algunas modificaciones menores, especialmente en relación a la realidad institucional nacional. Por este motivo, como es previsible, contiene múltiples ámbitos que, además de resultar discutibles, requieren de importante trabajo legislativo con el fin de compatibilizarlos con el estado actual de la regulación nacional en la materia.”

Luego el 14 de julio de 2020, se da cuenta en la Sala del Oficio de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento (N°177-20), por el cual solicita recabar su acuerdo para refundir los proyectos, iniciados en moción, contenidos en los boletines 11915-07, 12668-07 y 12776-07, con el iniciado en mensaje, contenido en el boletín N° 13588-07, lo cual es acordado con consulta al ejecutivo, el cual mediante oficio N° 235-368 del Presidente de la República don Sebastián Piñera, accedió a refundir el proyecto de su autoría, con las mociones contenidas en los boletines numeros 11915-07, 12668-07 y 12.776-07.

El 16 de junio de 2020 fue ingresado a la H. Cámara de Diputadas y Diputados este proyecto del ejecutivo “que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de mejorar la

persecución del narcotráfico y crimen organizado, regular el destino de los bienes incautados en esos delitos y fortalecer las instituciones de rehabilitación social”.

El fundamento principal de este proyecto de ley del ejecutivo es el “Combate frontal al narcotráfico y al crimen organizado”.

Para esos efectos, este mensaje del ejecutivo a diferencia de la moción parlamentaria respecto la cual nos hemos referido anteriormente y en concordancia con lo sugerido por la Excma. Corte Suprema, propone modificaciones a diversos cuerpos legales y no una ley especial donde se regule la materia.

En efecto, en el contenido del mensaje presidencial se proponen una serie de modificaciones de la ley N° 20.000 que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas; al Código Procesal Penal; a la ley N° 20.502, que crea el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del consumo de drogas; a la ley N° 19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos y a la ley N° 17.635, que establece normas sobre cobro ejecutivo de créditos de la corporación de la vivienda, corporación de servicios habitacionales, corporación de mejoramiento urbano y corporación de obras urbanas.

Luego el 4 de marzo de 2021 es evacuado el primer informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, luego del estudio y discusión del proyecto de ley refundido, que se llevó a cabo en las sesiones de dicha Comisión de los días 24 de junio; 2 y 13 de julio; 20 de agosto; 3 y 24 de septiembre; 1, 8,15 y 29 de octubre; 5 y 26 de noviembre; 3 y 17 de diciembre, todas de 2020 y 7,14 y 26 de enero; 1 y 4 de marzo, todas de 2021.

Dicho informe propone a la Sala de la Corporación la aprobación de un texto que incluye modificaciones normativas a una serie de cuerpos legales, las que no serán analizadas en este capítulo, ya que tal como se señala en la introducción del presente informe, el texto que será analizado en el siguiente capítulo corresponde al propuesto por la Comisión Mixta, aprobado por ambas Cámaras, el pasado 13 de Marzo por la H. Cámara de Diputadas y Diputados y el pasado 14 de marzo por el Senado.

No obstante lo anterior, es importante exponer los principales ejes del texto aprobado por la Comisión de la Cámara baja, el cual como veremos más adelante fue aprobado por la Sala de la H. Cámara de Diputadas y Diputados y en general tanto por la Comisión de Seguridad Ciudadana del Senado, presidida por el Senador don José Miguel Insulza y por la Sala de la Cámara Alta.

En efecto, esos ejes tal como posteriormente los resume el Senador José Miguel Insulza en la sesión de la Sala del Senado N° 101, de 1° de diciembre de 2021, son:

“La enajenación temprana y el comiso por equivalencia; es decir, la posibilidad de proceder a la enajenación temprana de los bienes incautados, lo cual permite reducir el patrimonio de las organizaciones delictuales y evitar que continúen en circulación bienes de causa u origen ilícito.

Y el comiso por equivalencia es una institución que permite que en cualquier circunstancia que no sea posible decomisar el producto del delito y demás bienes, efectos, objetos, documentos, etcétera, se podrá aplicar el comiso de una suma de dinero equivalente a su valor.

También se permite fiscalizar las compras por medio de la Unidad de Análisis Financiero.

Asimismo, se establece la pérdida de beneficios otorgados por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo a las personas condenadas por los delitos previstos en los artículos 1°, 2° y 3° de la Ley de Drogas, que podrán ser demandadas para restitución de los beneficios concedidos por dicho Ministerio.

La iniciativa dispone otras cuestiones importantes.

La creación de una nueva figura delictual y el perfeccionamiento de tipos penales, con la incorporación de un nuevo tipo penal relativo al consumo de drogas sin consentimiento, que permite sancionar precisamente a los que administran drogas a quienes no han consentido a recibirlas.

Se eliminan los conceptos de “calidad” y “pureza”, lo que permite una definición mucho más amplia de las que se consideran drogas requisables.

Se establecen normas destinadas a aumentar la respuesta punitiva respecto de conductas que vulneran la integridad de los menores de edad.

Se fortalece la institucionalidad encargada de la investigación y control, así como de la prevención, tratamiento y rehabilitación de la drogadicción y el alcoholismo.

Se amplían las entidades que pueden realizar el protocolo de análisis químico.

Se establece -y es un tema, a mi juicio, a discutir- el destino de bienes a las unidades policiales.

Se fortalece el Servicio Nacional de Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol.

Y se reasignan funciones en el procedimiento de acopio y destrucción de las sustancias ilícitas.”

Además el proyecto aprobado establece, que no podrán ejercer los cargos de Presidente de la República, Diputados, Senadores, Ministros de Estado, Subsecretarios, Delegados Presidenciales y otras autoridades, las personas que tuvieran dependencia de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicos ilegales, a menos que justifique su consumo por tratamiento médico.

Luego el 16 de marzo de 2021 el proyecto de ley es aprobado por la Sala de la H. Cámara de Diputadas y Diputados y ese mismo día se evacúa el oficio N° 16.358 a la Cámara revisora suscrito por el Presidente de la Corporación don Diego Paulsen Kehr dirigido a la Presidenta del Senado, dando cuenta de su contenido y de su aprobación por parte de dicha Corporación.

Al día siguiente, se dio cuenta del proyecto en el Senado y pasó a la Comisión de Seguridad Pública.

Posteriormente con fecha 2 de noviembre de 2021 se evacúa el informe de la Comisión de Seguridad Ciudadana, la que se abocó al estudio del proyecto de ley los días 28 de julio, 28 de septiembre, 5, 12 y 26 de octubre de 2021, aprobando en general dicho proyecto por la unanimidad de los Senadores integrantes de la Comisión, los señores José Miguel Insulza Salinas (Presidente), Felipe Kast Sommerhoff, Iván Moreira Barros, Jorge Pizarro Soto y Jaime Quintana Leal.

Luego en la sesión de la Sala de 1º de diciembre de 2021, se aprobó en general el proyecto y se dio plazo para presentar indicaciones hasta el 6 de enero de 2022, ello en razón de encontrarse con discusión inmediata por parte del ejecutivo, luego se prorrogó en varias oportunidades dicho plazo hasta quedar en definitiva para el 18 de julio de 2022 el plazo final para la presentación de indicaciones en la Secretaría de la Comisión de Seguridad Pública.

Luego el 21 de septiembre de 2022 fue evacuado el segundo informe de la Comisión de Seguridad Pública, en la cual fueron abordadas las 66 indicaciones presentadas al proyecto de ley aprobado en general por la Sala del Senado, siendo aprobadas algunas, otras rechazadas, varias retiradas y un par declaradas inadmisibles, pasando reglamentariamente el proyecto de ley a la Comisión de Hacienda del Senado.

Tal como señala el informe, el proyecto de ley aprobado en esta oportunidad en particular por la Comisión de Seguridad Pública del Senado, quedó con seis artículos permanentes y dos transitorios, los cuales modifican una serie de leyes y cuerpos normativos, correspondientes a la ley Nº 19.640, que establece la ley orgánica constitucional del Ministerio Público; Código Penal; Código Procesal Penal; Código Orgánico de Tribunales; ley Nº 20.000, que sanciona el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas; ley Nº 20.502, que crea el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación para el Consumo de Drogas y Alcohol, y modifica diversos cuerpos legales y la ley Nº 19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de Lavado y Bloqueo de Activos.

Posteriormente fue evacuado el 12 de octubre de 2022 el informe por parte de la Comisión de Hacienda del Senado, que se abocó a tratar el proyecto en las sesiones de los días 4 y 11 de octubre de 2022 con la asistencia de los Honorables Senadores señores Juan Antonio Coloma Correa (Presidente), José García Ruminot, Felipe Kast Sommerhoff, Ricardo Lagos Weber y Daniel Núñez Arancibia, introduciendo una serie de modificaciones al texto del proyecto de ley.

El 18 de octubre por primera oportunidad el proyecto de ley pasó a la sala del Senado para su discusión particular, solicitándose en esta instancia un informe complementario a la Comisión de Hacienda del Senado, repitiéndose luego esta situación por segunda vez.

Una vez recibido en la Sala el segundo informe complementario de la Comisión de Hacienda, en las sesiones de la Sala del Senado de los días 26 de octubre y 8 de

noviembre de 2022 se procedió a votar el proyecto de ley y el mismo día 8 de noviembre mediante Oficio N° 507/SEC/22 del Presidente del Senado dirigido al Presidente de la H. Cámara de Diputadas y Diputados, se dio cuenta del texto aprobado en segundo trámite legislativo, indicando cada una de las modificaciones al proyecto de ley aprobada en primer trámite legislativo por la Cámara baja.

Iniciado el tercer trámite constitucional, el 29 de noviembre de 2022, la Sala de la H. Cámara de Diputadas y Diputados, en sesión única, no obstante haber aprobado la mayoría de las modificaciones introducidas al proyecto por el Senado, rechazó algunas de ellas, dando origen al Oficio N° 17.893 del Presidente(A) de la H. Cámara de Diputadas y Diputados dirigido al Presidente del Senado, en el que da cuenta de dicha votación.

En consecuencia de acuerdo al artículo 71 de la Constitución Política de la República, se constituyó una Comisión Mixta abocada a resolver las diferencias surgidas entre ambas Cámaras en la tramitación del proyecto de ley, la que se constituyó el 17 de enero de 2023, con la asistencia de los H. Senadores señores Iván Flores García, José Miguel Insulza Salinas y Manuel José Ossandón Irrarrázabal; los H. Diputados señores Marcos Ilabaca Cerda y Gustavo Benavente Vergara y la H. Diputada Lorena Fries Monleón, siendo elegido Presidente de la Comisión el H. Senador José Miguel Insulza Salinas.

Luego el día 23 de enero de 2023 la Comisión Mixta emitió su informe, proponiendo la forma y el modo de resolver las divergencias surgidas entre la ambas Cámaras.

El 13 de marzo del presente, en sesión de la Sala de la H. Cámara de Diputadas y Diputados se aprobó el informe de la Comisión Mixta, informando ese día el Presidente de dicha Corporación de tal votación al Presidente del Senado mediante oficio N° 18.142.

Al día siguiente, la Sala del Senado aprobó el informe de la Comisión Mixta, informando de tal situación la Vicepresidenta del Senado, Luz Ebensperger Orrego al Presidente de la H. Cámara de Diputadas y Diputados, mediante Oficio N° 154/SEC/23 de fecha 14 de marzo de 2023.

Por último mediante Oficio N° 18.150 de fecha 17 de marzo del presente, del Presidente de la H. Cámara de Diputadas y Diputados dirigido a S.E. el Presidente de la República, se remitió el texto del proyecto de ley aprobado por el Congreso Nacional.

**Fuentes del capítulo:** Página web de la H. Cámara de Diputadas y Diputados; Proyecto de ley boletín N° 12776-07 denominado “Dispone la extinción del dominio sobre los productos e instrumentos del delito, en los casos y en la forma que indica”; Código Penal; Ley N° 20.000 que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas; Oficio N° 14.871 de fecha 17 de julio de 2019 del Presidente de la H. Cámara de Diputadas y Diputados dirigido al Presidente de la Excm. Corte Suprema; Proyecto de ley boletín N° 13588-07 denominado “que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de mejorar la persecución del narcotráfico y crimen organizado, regular el destino de los bienes incautados en esos delitos y fortalecer las instituciones de rehabilitación social”; Oficio N° 193-2019; Primer informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la H. Cámara de Diputadas y Diputados de 4 de marzo de 2021; Oficio N° 16.358 de la H. Cámara de Diputadas y Diputados dirigido al Presidente del Senado; Informe de la Comisión de Seguridad Ciudadana del Senado de fecha 2 de noviembre de 2021; Acta de la Sesión N° 101 del Senado de fecha 1º de diciembre de 2021; Segundo informe de la Comisión de Seguridad Pública del Senado, de fecha 21 de septiembre de 2022; Informe de la Comisión de Hacienda del Senado de fecha 12 de octubre de 2022; Oficio N° 507/SEC/22 de 8 de noviembre de 2022, del Presidente del Senado dirigido al Presidente de la H. Cámara de Diputadas y Diputados; Informe de la Comisión Mixta de 23 de enero de 2023; Oficio N° 18.142. de fecha 13 de marzo de 2022 del



### **III.- Análisis del proyecto de ley aprobado por el Congreso Nacional.-**

En el presente capítulo, junto con reproducir el texto final del proyecto de ley aprobado por el Congreso Nacional, explicaré y analizaré las normas más relevantes que aborda el proyecto, las cuales modifican una serie de leyes como veremos, siendo la ley N° 20.000 que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, la ley que más cantidad de modificaciones experimenta con este proyecto de ley.

Para estos efectos, con el fin de diferenciar y poder distinguir de mejor manera el texto del proyecto de ley aprobado con el análisis y explicación de las nuevas normas, el proyecto de ley aprobado será transcrito con una letra más pequeña, en cursiva y negrilla.

***“Artículo 1.- Modifícase la ley N° 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, de la siguiente forma:***

***1. Suprímese en el inciso final del artículo 4° la expresión “la calidad o pureza de”.***

Por lo tanto el inciso final del artículo 4° quedaría redactado de la siguiente manera:  
“Se entenderá que no concurre la circunstancia de uso o consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo, cuando **la calidad o pureza de** la droga poseída, transportada, guardada o portada no permita racionalmente suponer que está destinada al uso o consumo descrito o cuando las circunstancias de la posesión, transporte, guarda o porte sean indiciarias del propósito de traficar a cualquier título. **(En rojo la parte del artículo que se elimina).**”

***2. Incorpórase, como artículo 5°, el siguiente:***

***“Artículo 5°.- El que sin el consentimiento de la persona afectada le administre a ésta alguna de las sustancias referidas en el artículo 1°, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado medio a máximo y multa de once a veinte unidades tributarias mensuales.***

***Si se hubiese obrado con violencia o intimidación, para administrar u obligar a otro a consumir las sustancias referidas en el artículo 1°, la pena será de presidio mayor en sus grados mínimo a medio.***

***Lo dispuesto en los incisos precedentes no será aplicable si el hecho fuere constitutivo de un delito sancionado con igual o mayor pena por otra disposición legal, en cuyo caso, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 63 del Código Penal, el suministro de dichas sustancias o el empleo de violencia o intimidación serán considerados como una sola circunstancia agravante.***

***Si los delitos previstos en el presente artículo se hubieren realizado para facilitar o permitir la ejecución de otros delitos, las penas previstas de unos y otros se aplicarán de conformidad a lo dispuesto en el artículo 74 del Código Penal.”.***

Este nuevo artículo reemplazaría al actual artículo 5° de la ley N° 20.000, que textualmente señala que: “El que suministre a menores de dieciocho años de edad, a cualquier título, productos que contengan hidrocarburos aromáticos, tales como benceno, tolueno u otras sustancias similares, incurrirá en la pena de presidio menor en sus grados medio a máximo y multa de cuarenta a doscientas unidades tributarias mensuales.

Atendidas las circunstancias del delito, podrá imponerse, además, la clausura a que hace referencia el artículo 7°.”

**3. Incorpórase el siguiente artículo 5 bis:**

***“Artículo 5° bis.- El que suministre a menores de dieciocho años de edad, a cualquier título, productos que contengan solventes o gases inhalantes capaces de provocar daños a la salud o dependencia física o psíquica, tales como benceno, tolueno, u otras sustancias similares, incurrirá en la pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo y multa de ochenta a cuatrocientas unidades tributarias mensuales.”.***

El nuevo artículo 5 bis vendría a reemplazar el actual y vigente artículo 5º de la ley Nº 20.000 reproducido anteriormente.

En efecto el nuevo artículo 5º bis sanciona con otra redacción y con una pena y multa más elevada la misma conducta, reemplazando la frase “productos que contengan hidrocarburos aromáticos” por “productos que contengan solventes o gases inhalantes capaces de provocar daños a la salud o dependencia física o psíquica”, para luego señalar los mismo producto que indica la actual norma.

Con respecta a la pena y la multa, ambas las aumenta, la pena actual es de presidio menor en sus grados medio a máximo (541 días a 5 años) y la pena del proyecto de ley aprobado es de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo ( 3 años y 1 día a 10 años) por lo tanto aumenta la pena privativa de libertad tanto en el mínimo y como en el máximo y el rango de la multa de cuarenta a doscientas unidades tributarias mensuales la aumenta a una que va de las ochenta a las cuatrocientas unidades tributarias mensuales.

**4. Incorpórase en el artículo 8 el siguiente inciso segundo, pasando el actual inciso segundo a ser inciso tercero:**

***“Se entenderá justificado el cultivo de especies vegetales del género cannabis para la atención de un tratamiento de salud, con la presentación de la receta extendida para ese efecto por un médico cirujano tratante, la que deberá indicar el diagnóstico de la enfermedad, su tratamiento y duración, además de la forma de administración del cannabis, la que no podrá ser mediante combustión. Será sancionado con la pena de presidio mayor en su grado mínimo quien falsifique o maliciosamente haga uso de recetas falsas para justificar el cultivo de especies vegetales del género cannabis. Si se acreditare que dicha conducta tiene por objeto la comercialización de la droga o su facilitación a un tercero, la pena aumentará en un grado.”.***

Este nuevo inciso lo que hace es incorporar a la ley una justificación legal para las personas que cultivan cannabis y que han sido recetadas por un médico cirujano para que se les administre cannabis pero no por combustión para enfrentar una enfermedad.

En consecuencia el tipo legal tipificado en el nuevo artículo 8º de la ley Nº 20.000 quedaría redactado de la siguiente manera: “El que, careciendo de la debida autorización, siembre, plante, cultive o coseche especies vegetales del género cannabis u otras productoras de sustancias estupefacientes o sicotrópicas, incurrirá en la pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo y multa de cuarenta a cuatrocientas unidades tributarias mensuales, a menos que justifique que están destinadas a su uso o consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo, caso en el cual sólo se aplicarán las sanciones de los artículos 50 y siguientes.

Se entenderá justificado el cultivo de especies vegetales del género cannabis para la atención de un tratamiento de salud, con la presentación de la receta extendida para ese efecto por un médico cirujano tratante, la que deberá indicar el diagnóstico de la enfermedad, su tratamiento y duración, además de la forma de administración del cannabis, la que no podrá ser mediante combustión. Será sancionado con la pena de presidio mayor en su grado mínimo quien falsifique o maliciosamente haga uso de recetas falsas para justificar el cultivo de especies vegetales del género cannabis. Si se acreditare que dicha conducta tiene por objeto la comercialización de la droga o su facilitación a un tercero, la pena aumentará en un grado

Según la gravedad del hecho y las circunstancias personales del responsable, la pena podrá rebajarse en un grado.”

**5. Elimínase en el inciso primero del artículo 9 la frase “formalizado la investigación,”.**

En consecuencia el inciso primero del artículo 9º de la ley Nº 20.000 quedaría redactado de la siguiente forma: “La autorización a que se refiere el artículo anterior será otorgada por el Servicio Agrícola y Ganadero. No podrá otorgarse dicha autorización a las personas naturales respecto de las cuales se hubiere **formalizado la investigación**, decretado la suspensión condicional del procedimiento prevista en el artículo 237 del Código Procesal Penal o hayan sido condenadas por alguna de las conductas punibles contempladas en esta ley o en las leyes 19.366 y 19.913. Tampoco se otorgará a las personas jurídicas, cuando cualesquiera de sus representantes legales o administradores, y socios en el caso de las sociedades que no sean anónimas, se encuentren en alguna de dichas situaciones. (En rojo la parte del artículo que se elimina).

El artículo 9º de la ley Nº 20.000 se refiere a la autorización prevista en el inciso primero del artículo 8º de la misma ley que otorga el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) para poder sembrar, plantar, cultivar o cosechar especies vegetales del género cannabis u otras productoras de sustancias estupefacientes o sicotrópicas y la modificación que se aprobó con el proyecto de ley respecto este artículo, dice relación con que dicha autorización se podrá otorgar a personas respecto de quienes se haya formalizado una investigación por algunos de los delitos contemplados en esta ley Nº 20.000, la antigua ley de drogas Nº 19.366 o la ley Nº 19.913 que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos.

Esta modificación es razonable, en consideración a que en la actualidad una persona respecto de la cual solamente se haya formalizada una investigación en su contra, independientemente del resultado de dicha investigación, se encuentra inhabilitada por ley para obtener la autorización del SAG señalada anteriormente, cuestión que sin duda, atenta contra la presunción de inocencia.

**6. Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 19:**

**a) Incorpórase en el literal e), entre las expresiones “valiéndose de” y “personas exentas”, la frase “niños, niñas o adolescentes o”.**

En primer término, es relevante señalar que en el artículo 19 se establecen las circunstancias agravantes de la ley Nº 20.000.

Con la incorporación de la frase señalada precedentemente, la circunstancia agravante regulada en literal e) del artículo 19, quedaría redactado de la siguiente manera: “e) Si el delito se cometió valiéndose de **niños, niñas o adolescentes o** personas exentas de responsabilidad penal.” *(En azul la frase que incorpora el proyecto de ley).*

De acuerdo a lo establecido en el N° 2 del artículo 10 del Código Penal, están exentos de responsabilidad penal los menores de 18 años, por ello podría resultar redundante la frase que adiciona el proyecto de ley aprobado.

**b) Agrégase el siguiente literal i), nuevo:**

***“i) Si el delito es perpetrado por una persona que desempeñe funciones laborales o educativas de manera permanente con menores de edad, o tenga con ellos una relación directa y constante.”.***

Actualmente las circunstancias agravantes de la ley N° 20.000 tipificadas en el artículo 19 de dicha ley se describen hasta la letra h).

En consecuencia esta letra i), corresponde a una nueva circunstancia agravante que se suma a las ya existentes.

**c) Agrégase el siguiente inciso final:**

***“La pena se aumentará en dos grados cuando quien se valga de niños, niñas o adolescentes o personas exentas de responsabilidad penal en los términos señalados en la letra e) proveere de armas de fuego a estos últimos para alcanzar sus fines delictivos.”.***

El proyecto de ley aprobado por el Congreso, agrega este inciso final, como una circunstancia agravante calificada, ello en virtud que todas las circunstancias agravantes establecidas en los literales de dicho artículo aumentan la pena en un grado tal como se establece en el encabezdo del referido artículo, en cambio este último inciso final establece que si se incurre en dicha agravante la pena se aumentará en dos grados, por ello es que me refiero a una circunstancia agravante calificada.

**7. Modifícase el artículo 40 en el siguiente sentido:**

**a) Incorpóranse las siguientes enmiendas en el inciso primero:**

***i. Intercálase entre la voz “Los” y el vocablo “instrumentos” la expresión “bienes muebles e inmuebles,”.***

***ii. Intercálase entre las expresiones “ser destinados” y “por el juez de garantía” el término “provisionalmente”.***

***iii. Sustitúyese la frase “, oyendo al Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol. Estos bienes deberán ser utilizados en los fines propios de la entidad que los reciba, la que deberá acreditar recursos suficientes para hacerse cargo de los costos de conservación” por la siguiente expresión “. Asimismo, los bienes podrán ser destinados provisionalmente a unidades policiales que participen en la investigación y desarticulación de organizaciones criminales destinadas a cometer los delitos sancionados en la presente ley. En todo caso, cada institución deberá acreditar recursos suficientes para hacerse cargo de los costos de conservación, los que se financiarán con cargo a su presupuesto. Los inmuebles incautados y destinados provisionalmente estarán exentos del pago de impuestos, contribuciones o cargas mientras subsista la incautación. Para estos efectos, el juez de garantía informará al Servicio de Impuestos Internos, a la Tesorería General de la República y a la municipalidad de la comuna en la que se encuentre el bien respectivo, la destinación provisional y, cuando fuere procedente, su término, en ambos casos mediante remisión de copia de la resolución que así lo disponga. La institución destinataria de inmuebles***

*incautados asumirá la responsabilidad de su administración y deberá rendir cuentas de su gestión al juez de garantía a lo menos trimestralmente.”.*

*b) Intercálase el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando los actuales incisos segundo y tercero a ser tercero y cuarto respectivamente:*

*“Para efectos de la solicitud del Ministerio Público sobre destinación provisoria, se deberá oficiar al Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, el que podrá contestar por escrito, dentro de quinto día de notificado. De no recibir respuesta dentro de plazo, se entenderá que el Servicio concurre con la decisión del Ministerio Público.”.*

*c) Suprímense los actuales incisos cuarto y quinto.*

*d) Reemplázase el inciso final por el siguiente:*

*“El Ministerio Público deberá informar trimestralmente al Ministerio del Interior y Seguridad Pública y al Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, sobre los dineros, valores y demás bienes incautados conforme a esta ley. El Ministerio del Interior y Seguridad Pública deberá dictar un reglamento para regular las materias que trata este párrafo.”.*

Como podemos apreciar el proyecto de ley hace una serie de modificaciones al artículo 40 de la ley Nº 20.000.

Con el fin de entender mejor dichas modificaciones, enseguida transcribiré como quedaría el texto del artículo 40 con las modificaciones aprobadas por el Congreso Nacional, para luego explicar los dos principales alcances de dichas modificaciones. *(En letra más pequeña, negrilla y cursiva consta las adiciones del proyecto de ley al artículo 40)*

**“Artículo 40:** Los *bienes muebles e inmuebles*, instrumentos, objetos de cualquier clase y los efectos incautados de los delitos a que se refiere esta ley y de que se hace mención en los artículos 187 y 188 del Código Procesal Penal, podrán ser destinados *provisionalmente* por el juez de garantía, a solicitud del Ministerio Público, a una institución del Estado o, previa caución, a una institución privada sin fines de lucro, que tenga como objetivo la prevención del consumo indebido, el tratamiento y la rehabilitación de las personas afectadas por la drogadicción, o el control del tráfico ilegal de estupefacientes. *Asimismo, los bienes podrán ser destinados provisionalmente a unidades policiales que participen en la investigación y desarticulación de organizaciones criminales destinadas a cometer los delitos sancionados en la presente ley. En todo caso, cada institución deberá acreditar recursos suficientes para hacerse cargo de los costos de conservación, los que se financiarán con cargo a su presupuesto. Los inmuebles incautados y destinados provisionalmente estarán exentos del pago de impuestos, contribuciones o cargas mientras subsista la incautación. Para estos efectos, el juez de garantía informará al Servicio de Impuestos Internos, a la Tesorería General de la República y a la municipalidad de la comuna en la que se encuentre el bien respectivo, la destinación provisional y, cuando fuere procedente, su término, en ambos casos mediante remisión de copia de la resolución que así lo disponga. La institución destinataria de inmuebles incautados asumirá la responsabilidad de su administración y deberá rendir cuentas de su gestión al juez de garantía a lo menos trimestralmente.*

*Para efectos de la solicitud del Ministerio Público sobre destinación provisoria, se deberá oficiar al Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, el que podrá contestar por escrito, dentro de quinto día de notificado. De no recibir respuesta dentro de plazo, se entenderá que el Servicio concurre con la decisión del Ministerio Público.*

La incautación de las armas se regirá por la ley Nº 17.798, sobre Control de Armas. Los dineros se depositarán en el Banco del Estado de Chile, en cuentas o valores reajustables.

Si la incautación recae sobre establecimientos industriales o mercantiles, sementeras, plantíos o en general frutos pendientes, el juez de garantía, a solicitud del Ministerio Público, designará un administrador provisional, quien deberá rendir cuenta de su gestión a este último, a lo menos trimestralmente. La incautación de un inmueble comprende la de sus frutos o rentas.

***El Ministerio Público deberá informar trimestralmente al Ministerio del Interior y Seguridad Pública y al Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, sobre los dineros, valores y demás bienes incautados conforme a esta ley. El Ministerio del Interior y Seguridad Pública deberá dictar un reglamento para regular las materias que trata este párrafo.”***

Como podemos apreciar, la redacción del nuevo artículo 40 crea la institución de la “**destinación provisoria**” de los bienes muebles e inmuebles incautados de los delitos, añadiendo la posibilidad de destinarlos a unidades policiales, manteniendo la posibilidad de destinarlos, pero “provisionalmente” a instituciones del estado o previa caución a una institución privada sin fines de lucro que tenga como objetivo la prevención del consumo indebido, el tratamiento y la rehabilitación de las personas afectadas por la drogadicción, o el control del tráfico ilegal de estupefacientes.

Otro aspecto importante a destacar, es que con la nueva redacción de este artículo, se elimina la posibilidad que establecía de poder enajenar dichos bienes, los cuales en todo caso, si en la sentencia definitiva no se condenaba al comiso, debía ser devuelto a quien corresponda el precio de la venta, sus reajustes e intereses.

No obstante lo anterior, la enajenación de dichos bienes y de otros que se agregan, se regula en el nuevo artículo 40 bis que enseguida se aborda.

**8. Incorpórase el siguiente artículo 40 bis:**

***“Artículo 40 bis.- A solicitud del Ministerio Público o del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, el juez de garantía podrá disponer la enajenación temprana de los bienes incautados, siempre que se trate de vehículos motorizados, o bienes respecto de los cuales existan antecedentes de que continúan siendo utilizados en actividades ilícitas, o se trate de bienes sujetos a corrupción, susceptibles de próximo deterioro, cuya conservación sea difícil o muy dispendiosa.***

***Para estos efectos, el juez de garantía deberá oficiar al Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol para que tome conocimiento de la resolución que dispone la enajenación temprana, y también deberá oficiar a la Dirección General del Crédito Prendario para que informe sobre la tasación del respectivo bien. En caso de que éste deba ser destruido por carecer de valor, de conformidad a lo dispuesto en el inciso primero el artículo 46, el juez de garantía así deberá decretarlo en la resolución.***

***Si el bien figura inscrito en algún registro público, sea que acredite o no propiedad, el juez de garantía, antes de resolver la enajenación temprana, deberá citar a quienes figuren como titulares de derechos en dichos registros. En caso de que el citado no comparezca a la audiencia de enajenación temprana, se procederá en su ausencia.***

***La enajenación se llevará a cabo por la Dirección General del Crédito Prendario en subasta pública cuando la resolución que disponga la enajenación se encuentre firme o ejecutoriada, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46 y en el artículo 468 bis del Código Procesal Penal.***

***El monto de lo obtenido en la subasta será depositado en el Banco del Estado de Chile, en cuentas o valores reajustables y con intereses.***

***En el evento que la sentencia no establezca el comiso de las especies enajenadas, el precio de la venta, sus reajustes e intereses serán restituidos a quien corresponda.”.***

Es en este nuevo artículo 40 bis que se agrega a la ley de drogas, se regula la enajenación temprana de los bienes incautados, señalándose expresamente en esta nueva normativa a los vehículos motorizados, o bienes respecto de los cuales existan antecedentes de que continúan siendo utilizados en actividades ilícitas y al igual que el actual artículo 40 a los bienes sujetos a corrupción, susceptibles de próximo deterioro, cuya conservación sea difícil o muy dispendiosa.

También con la nueva legislación aprobada por el Congreso, el Juez de Garantía podrá disponer dicha enajenación ya no solamente por la solicitud del Ministerio Público, sino que además por petición del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol.

Además es importante relevar, que este nuevo artículo mantiene la disposición que si no se establece en la sentencia el comiso de los bienes, el dinero de la venta, junto con sus reajustes e intereses serán restituidos a quien corresponda, manteniéndose para esos efectos el monto de lo obtenido en la subasta en el Banco del Estado de Chile en cuentas o valores reajustables y con intereses, cuestión esta última que no establece la actual legislación.

***9. Reemplázase, en el inciso primero del artículo 41, la expresión “5°” por “5° bis” y sustitúyese, en el inciso final, la locución “hidrocarburos aromáticos”, por la frase “gases o solventes inhalantes, así como sus contenedores,”.”.***

***10. Modifícase el artículo 43 de la siguiente forma:***

***a) Sustitúyese, en el inciso primero, la frase “el más breve plazo,” por “el más breve plazo que no podrá exceder de 30 días”.”.***

***b) Sustitúyese el inciso final por el siguiente:***

***“Efectuado el análisis a que se refiere el inciso primero, los precursores y sustancias químicas esenciales deberán ser enajenados en la forma dispuesta en el artículo 40 bis; o a través de venta directa, a solicitud del Ministerio Público con autorización del juez de garantía; o destruidos por el Servicio de Salud respectivo, conforme a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 41.”.***

***11. Modifícase el artículo 45 de la siguiente forma:***

Sin duda que las modificaciones que enseguida se analizarán al actual artículo 45 de la ley Nº 20.000, son muy relevantes y están relacionadas directamente con los objetivos que buscaba el proyecto de ley original al que nos hemos referido en una primera parte del presente informe.

En efecto, el tratamiento del comiso con las modificaciones aprobadas por el Congreso Nacional, modifica sustancialmente esta institución jurídica, modernizando su regulación de acuerdo a las nuevas tendencias que han sido adoptadas en la legislación comparada, en especial, con la posibilidad de poder decretar el comiso independientemente que dicha sentencia en definitiva absuelva o sobresea al acusado.

El actual artículo 45 de la ley 20.000 regula el comiso en los delitos tipificados en la ley de drogas, el proyecto de ley aprobado modifica este artículo de manera sustancial, en especial con los seis incisos nuevos que agrega a este artículo.

Con el objeto que resulte más fácil la comprensión de estas modificaciones, luego de transcribir las normas aprobadas por el proyecto de ley, transcribiré como quedaría el nuevo artículo 45 con las modificaciones aprobadas por el Congreso Nacional.

*a) Intercálase en el inciso primero, entre las expresiones “por terceros a sabiendas” y “del destino u origen”, la siguiente: “o no pudiendo menos que conocer”.*

*b) Agréganse los siguientes incisos tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo, nuevos:*

*“Se impondrá el comiso de toda cosa que hubiere sido empleada como instrumento en la perpetración de un delito previsto en esta ley y que fuere especialmente apta para ser utilizada delictivamente. Se entenderá que son especialmente aptas para ser utilizadas delictivamente aquellas cosas que se encuentren en general prohibidas por la ley. El tribunal deberá decretar el comiso de cosas especialmente aptas para ser utilizadas delictivamente incluso cuando el imputado fuere absuelto o sobreseído, bastando para ello el establecimiento de su uso en un hecho delictivo. El comiso de instrumentos especialmente aptos para ser utilizados delictivamente procederá aun respecto del tercero de buena fe y que tuviere título para poseer la cosa, a menos que se estableciere que él no tuvo responsabilidad en el uso de la cosa por parte del hechor. Si el comiso afectare a un tercero de buena fe, este podrá solicitar indemnización al responsable.*

*El comiso de una cosa que no fuere especialmente apta para ser utilizada delictivamente y que hubiere servido de instrumento en la perpetración del delito será impuesto en la sentencia condenatoria y no procederá respecto del tercero de buena fe.*

*Se impondrá el comiso de toda cosa obtenida o producida a través de la perpetración de un delito previsto en esta ley. El comiso de los efectos del delito será decretado por el juez incluso si el imputado fuere absuelto o sobreseído, siempre que se estableciere que la cosa proviene de un hecho ilícito. Dicho comiso no procederá respecto del tercero de buena fe. Tratándose de efectos de posesión ilícita, el comiso procederá en todos los casos.*

*Cuando por cualquier circunstancia no sea posible decomisar las especies señaladas en este artículo que hubieren sido usadas como instrumentos en la perpetración del delito o que hubieren sido obtenidas o producidas a través de su perpetración, el tribunal aplicará el comiso a una suma de dinero equivalente a su valor o a otros bienes que sean de propiedad del condenado.*

*El tribunal podrá decretar el comiso de los activos patrimoniales cuyo valor correspondiere a la cuantía de las ganancias obtenidas a través de la perpetración de un delito sancionado en la presente ley cuando establezca que tales ganancias provienen de los delitos objeto de la condena. Las ganancias comprenden los frutos y las utilidades que el delito hubiere originado, cualquiera sea su naturaleza jurídica, así como el equivalente a los costos evitados mediante el hecho ilícito. Siempre que se establezca que las ganancias proceden de un hecho ilícito el juez decretará el comiso de ellas, aunque el imputado fuere sobreseído o absuelto.*

*Tratándose de delitos de esta ley perpetrados de conformidad con la modalidad descrita en el artículo 16, se impondrá comiso de todos los activos vinculados a la actividad en cuyo contexto se hubiere ejecutado el delito objeto de la condena, a menos que se acredite su origen lícito.”.”.*

Enseguida paso a reproducir el artículo 45 considerando las modificaciones del proyecto de ley aprobado por el Congreso Nacional. *(En letra más pequeña, en cursiva y negrilla la modificación al inciso primero del artículo 45 y los seis nuevos incisos contenidos en el proyecto de ley).*



“Sin perjuicio de las reglas generales, caerán especialmente en comiso los bienes raíces; los muebles, tales como vehículos motorizados terrestres, naves y aeronaves, dinero, efectos de comercio y valores mobiliarios; y, en general, todo otro instrumento que haya servido o hubiere estado destinado a la comisión de cualquiera de los delitos penados en esta ley; los efectos que de ellos provengan y las utilidades que hubieren originado, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, o las transformaciones que hubieren experimentado, como, asimismo, todos aquellos bienes facilitados o adquiridos por terceros a sabiendas **o no pudiendo menos que conocer** del destino u origen de los mismos.

Igual sanción se aplicará respecto de las sustancias señaladas en el inciso primero del artículo 2º, y de las materias primas, elementos, materiales, equipos e instrumentos usados o destinados a ser utilizados, en cualquier forma, para cometer alguno de los delitos sancionados en esta ley.

*Se impondrá el comiso de toda cosa que hubiere sido empleada como instrumento en la perpetración de un delito previsto en esta ley y que fuere especialmente apta para ser utilizada delictivamente. Se entenderá que son especialmente aptas para ser utilizadas delictivamente aquellas cosas que se encuentren en general prohibidas por la ley. El tribunal deberá decretar el comiso de cosas especialmente aptas para ser utilizadas delictivamente incluso cuando el imputado fuere absuelto o sobreseído, bastando para ello el establecimiento de su uso en un hecho delictivo. El comiso de instrumentos especialmente aptos para ser utilizados delictivamente procederá aun respecto del tercero de buena fe y que tuviere título para poseer la cosa, a menos que se estableciere que él no tuvo responsabilidad en el uso de la cosa por parte del hechor. Si el comiso afectare a un tercero de buena fe, este podrá solicitar indemnización al responsable.*

*El comiso de una cosa que no fuere especialmente apta para ser utilizada delictivamente y que hubiere servido de instrumento en la perpetración del delito será impuesto en la sentencia condenatoria y no procederá respecto del tercero de buena fe.*

*Se impondrá el comiso de toda cosa obtenida o producida a través de la perpetración de un delito previsto en esta ley. El comiso de los efectos del delito será decretado por el juez incluso si el imputado fuere absuelto o sobreseído, siempre que se estableciere que la cosa proviene de un hecho ilícito. Dicho comiso no procederá respecto del tercero de buena fe. Tratándose de efectos de posesión ilícita, el comiso procederá en todos los casos.*

*Cuando por cualquier circunstancia no sea posible decomisar las especies señaladas en este artículo que hubieren sido usadas como instrumentos en la perpetración del delito o que hubieren sido obtenidas o producidas a través de su perpetración, el tribunal aplicará el comiso a una suma de dinero equivalente a su valor o a otros bienes que sean de propiedad del condenado.*

*El tribunal podrá decretar el comiso de los activos patrimoniales cuyo valor correspondiere a la cuantía de las ganancias obtenidas a través de la perpetración de un delito sancionado en la presente ley cuando establezca que tales ganancias provienen de los delitos objeto de la condena. Las ganancias comprenden los frutos y las utilidades que el delito hubiere originado, cualquiera sea su naturaleza jurídica, así como el equivalente a los costos evitados mediante el hecho ilícito. Siempre que se establezca que las ganancias proceden de un hecho ilícito el juez decretará el comiso de ellas, aunque el imputado fuere sobreseído o absuelto.*

*Tratándose de delitos de esta ley perpetrados de conformidad con la modalidad descrita en el artículo 16, se impondrá comiso de todos los activos vinculados a la actividad en cuyo contexto se hubiere ejecutado el delito objeto de la condena, a menos que se acredite su origen lícito.”*

**12. Modifícase el artículo 46 en el siguiente sentido:**

Luego de transcribir las modificaciones aprobadas en el proyecto de ley al artículo 46 de la ley N° 20.000 por parte del Congreso Nacional, reproduciré dicho artículo incluyendo esas modificaciones.

*a) Sustitúyese en el inciso primero la expresión “si carecieren de valor” por la siguiente frase: “por carecer de valor, lo que será determinado por el Departamento de Tasaciones de dicha institución”.*

*b) Incorpórase un nuevo inciso segundo, pasando el actual inciso segundo a ser inciso tercero, del siguiente tenor:*

*“Una vez decretado el comiso de un inmueble que haya sido destinado provisionalmente al Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol o a otro organismo público, éste, previa autorización de la Dirección de Presupuestos, podrá solicitar al juez de garantía que le sea transferido su dominio, con fines de prevención y rehabilitación del consumo de drogas o alcohol, sin que proceda en este caso la enajenación en pública subasta establecida en el artículo 469 del Código Procesal Penal.”.*

*c) Modifícase el actual inciso segundo, que ha pasado a ser inciso tercero, de la siguiente forma:*

*i. Intercálase, entre la expresión “en tal situación” y la palabra “ingresarán”, la frase “, el producto de la enajenación temprana a que se refiere el artículo 40 bis, así como los dineros incautados no decomisados y no reclamados por sus dueños,”.*

*ii. Intercálase entre las expresiones “consumo de drogas” y “, tratamiento y rehabilitación”, la expresión “y alcohol”.*

*iii. Intercálase entre las expresiones “por la drogadicción” y “. Un reglamento”, el siguiente texto: “y alcoholismo. Asimismo, podrá ser utilizado en proyectos, estudios e investigaciones, infraestructura y capacitaciones, que permitan apoyar directamente el efectivo cumplimiento de la labor del Servicio”.*

Enseguida reproduzco el artículo 46 incorporando las modificaciones del proyecto de ley aprobado en el Congreso Nacional. *(En letra más pequeña, en cursiva y negrilla las modificaciones).*

**“Artículo 46.-** Los bienes decomisados en conformidad a esta ley serán enajenados en subasta pública por la Dirección General del Crédito Prendario, la que podrá, además, ordenar su destrucción, *por carecer de valor, lo que será determinado por el Departamento de Tasaciones de dicha institución.*

*Una vez decretado el comiso de un inmueble que haya sido destinado provisionalmente al Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol o a otro organismo público, éste, previa autorización de la Dirección de Presupuestos, podrá solicitar al juez de garantía que le sea transferido su dominio, con fines de prevención y rehabilitación del consumo de drogas o alcohol, sin que proceda en este caso la enajenación en pública subasta establecida en el artículo 469 del Código Procesal Penal.*

El producto de la enajenación de los bienes y valores decomisados y los dineros en tal situación, *el producto de la enajenación temprana a que se refiere el artículo 40 bis, así como los dineros incautados no decomisados y no reclamados por sus dueños,* ingresarán a un fondo especial del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, con el objetivo de ser utilizados en programas de prevención del consumo de drogas y *alcohol*, tratamiento y rehabilitación de las personas afectadas por la drogadicción y

**alcoholismo. Asimismo, podrá ser utilizado en proyectos, estudios e investigaciones, infraestructura y capacitaciones, que permitan apoyar directamente el efectivo cumplimiento de la labor del Servicio.** Un reglamento establecerá la forma de distribución de los fondos, así como los mecanismos que garanticen la transparencia de los actos tendientes a su traspaso.

Igual aplicación se dará al monto de las multas impuestas en esta ley y al precio de la subasta de las especies de que hace mención el artículo 470 del Código Procesal Penal. Se exceptúan de esta disposición las armas de fuego y demás elementos a que se refiere la ley Nº 17.798, sobre Control de Armas.

El tribunal deberá informar al Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol sobre los bienes que hubieran sido declarados en comiso, así como de las multas impuestas en conformidad con esta ley, dentro de los quince días hábiles a la fecha en que la sentencia que así lo decreta haya quedado ejecutoriada.

En lo no contemplado en esta ley, regirán las reglas generales contenidas en el Párrafo 2º del Título VIII del Libro Cuarto del Código Procesal Penal.

El Fondo a que se refiere este artículo será el continuador del Fondo establecido en el artículo 28 de la ley Nº 19.366.”

**13. Intercálase en el inciso primero del artículo 55, entre la palabra “exporten” y el vocablo “precursores”, la expresión “, transporten, distribuyan, comercialicen, almacenen o eliminen”.**

Con esta modificación el artículo 55 de la ley Nº 20.000, quedaría con la siguiente redacción: *(En letra más pequeña, en cursiva y negrilla las modificaciones).*

**“Artículo 55.-** Las personas naturales o jurídicas que produzcan, fabriquen, preparen, importen o exporten, **transporten, distribuyan, comercialicen, almacenen o eliminen** precursores o sustancias químicas esenciales catalogadas por el reglamento a que alude el artículo 58 como susceptibles de ser utilizadas para la fabricación ilícita de drogas estupefacientes o sicotrópicas, deberán inscribirse en un registro especial que la Subsecretaría del Interior creará para tal efecto.

Sólo quienes se hayan inscrito en ese registro especial podrán efectuar las operaciones y actividades previstas en el inciso precedente con precursores y sustancias químicas esenciales catalogadas en dicho reglamento. Las inscripciones deberán ser renovadas periódicamente.”

**14. Sustitúyese en el inciso final del artículo 56 la oración “Las resoluciones judiciales aludidas en los incisos anteriores se comunicarán a la Subsecretaría del Interior tan pronto se encuentren firmes.” por la siguiente: “Para efectos de la suspensión, cancelación o denegación de la inscripción en el registro, el Ministerio Público remitirá trimestralmente a la Subsecretaría del Interior la nómina de los sujetos que hubieren sido condenados, beneficiarios de suspensión condicional del procedimiento o formalizados por los delitos establecidos en esta ley y en las leyes Nos 19.366 y 19.913.”.**

Con esta modificación, el artículo 56 de la ley Nº 20.000, quedaría con la siguiente redacción: *(En letra más pequeña, en cursiva y negrilla las modificaciones).*

**“Artículo 56.-** Para inscribirse en el registro se deberán presentar antecedentes que permitan la plena individualización de la persona interesada y del domicilio en que funciona la industria. En caso de tratarse de una persona jurídica, se requerirán además los

antecedentes de su constitución legal, el número de rol único tributario y los poderes vigentes de el o los representantes legales. Para los efectos de evaluar la circunstancia mencionada en el inciso siguiente, se deberán acompañar los certificados de antecedentes penales respectivos.

La inscripción en el registro especial sólo podrá ser denegada a las personas naturales respecto de las cuales se hubiere formalizado la investigación, decretado la suspensión condicional del procedimiento prevista en el artículo 237 del Código Procesal Penal o hayan sido condenadas por alguna de las conductas punibles contempladas en esta ley o en las leyes N°s. 19.366 y 19.913. También se podrá denegar respecto de las personas jurídicas, cuando cualesquiera de sus representantes legales o administradores, y socios en el caso de las sociedades que no sean anónimas, se encuentren en alguna de dichas situaciones.

Del mismo modo, la inscripción en el registro será suspendida si, con posterioridad a ella, se formaliza la investigación por alguno de los delitos aludidos y se cancelará, desde que se encuentre ejecutoriada la respectiva sentencia de término condenatoria.

***Para efectos de la suspensión, cancelación o denegación de la inscripción en el registro, el Ministerio Público remitirá trimestralmente a la Subsecretaría del Interior la nómina de los sujetos que hubieren sido condenados, beneficiarios de suspensión condicional del procedimiento o formalizados por los delitos establecidos en esta ley y en las leyes Nos 19.366 y 19.913. La Subsecretaría, a la brevedad, dictará la correspondiente resolución, de carácter declarativo, y la comunicará a los interesados.”***

Con esta modificación se establece que para ser más operativa la suspensión, cancelación o denegación de la inscripción en el registro establecido en el artículo precedente, que lleva la Subsecretaría del Interior, será el Ministerio Público la entidad que trimestralmente le comunicará a dicha repartición la nómina de las personas condenadas, beneficiarios de suspensión condicional del procedimiento o formalizados por los delitos establecidos en esta ley, en la antigua ley de drogas o en la ley que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos.

Esta modificación, viene a regular de mejor manera esta materia, ya que la actual disposición que se deroga además de no establecer plazos señalaba en forma genérica sin singularizar a que entidad le correspondía comunicar a la mencionada Subsecretaría las resoluciones señaladas anteriormente.

**15. Modifícase el artículo 57 de la siguiente forma:**

***“a) Modifícase el inciso primero en el siguiente sentido:***

***i. Sustitúyese la frase “encontrarse disponibles para ser remitidos o examinados por la autoridad responsable del registro”, por la siguiente: “ser remitidos a la autoridad responsable del registro”.***

***ii. Sustitúyese el texto “. Asimismo, comunicarán a la referida autoridad”, por lo siguiente: “, y podrán ser examinados tanto por ésta como por la Policía de Investigaciones y Carabineros de Chile, quienes colaborarán con la autoridad. Asimismo, las personas registradas comunicarán a la autoridad responsable del registro”.”.***

***b) Agrégase el siguiente inciso final, nuevo:***

*“Las personas naturales o jurídicas que no se encuentren registradas y que produzcan, fabriquen, preparen, transporten, importen, exporten, distribuyan, comercialicen, almacenen o eliminen precursores o sustancias químicas esenciales catalogadas por el reglamento a que alude el artículo 58, podrán ser examinadas por las autoridades señaladas en el inciso primero y estarán sujetas a las sanciones correspondientes.”.*”.

Con las modificaciones precedentes al artículo 57 de la ley N° 20.000, dicho artículo quedaría con la siguiente redacción: *(En letra más pequeña, en cursiva y negrilla las modificaciones).*

**“Artículo 57.-** Las personas que se encuentren registradas en conformidad al artículo 55 deberán mantener un inventario de las existencias de las sustancias a que se refiere dicho artículo y una relación completa y actualizada del movimiento que éstas experimenten, los que deberán *ser remitidos a la autoridad responsable del registro* con la frecuencia y bajo las modalidades que el reglamento indique, *y podrán ser examinados tanto por ésta como por la Policía de Investigaciones y Carabineros de Chile, quienes colaborarán con la autoridad. Asimismo, las personas registradas comunicarán a la autoridad responsable del registro* las operaciones de importación y exportación, con antelación a la fecha prevista para el embarque o para el envío legal de la exportación, respecto de lo cual la Subsecretaría del Interior notificará al país importador.

El intercambio de información que se realice con organismos internacionales y con otros Estados, por aplicación de lo señalado en el inciso precedente, se sujetará a lo dispuesto en las convenciones y tratados internacionales, o en su defecto, al principio de reciprocidad, y se condicionará a que el Estado que reciba la información mantenga el carácter confidencial con que se le remite.

*Las personas naturales o jurídicas que no se encuentren registradas y que produzcan, fabriquen, preparen, transporten, importen, exporten, distribuyan, comercialicen, almacenen o eliminen precursores o sustancias químicas esenciales catalogadas por el reglamento a que alude el artículo 58, podrán ser examinadas por las autoridades señaladas en el inciso primero y estarán sujetas a las sanciones correspondientes”*

Las modificaciones del proyecto de ley aprobado a este artículo se refieren básicamente a regular de mejor manera el funcionamiento del registro y dar una mayor participación en la fiscalización de este tema tanto a la Policía de Investigaciones de Chile como a Carabineros de Chile, en lo que se refiere a las personas que están inscritas en el registro y a aquellas que no lo están.

**16. Modifícase el artículo 59 de la siguiente manera:**

**a) Introdúcense en el inciso primero las siguientes enmiendas:**

*i. Intercálase entre las expresiones “cuando la autoridad lo requiera,” y “y de informar”, la frase “de mantener actualizados los datos en el Registro”.*

*ii. Agrégase, a continuación del punto y aparte, la siguiente oración: “En casos calificados de reincidencia, procederá además la clausura del establecimiento.”.*

**b) Incorpóranse los siguientes incisos segundo y tercero:**

*“Para la determinación del monto de la multa se considerará la gravedad de la infracción, la conducta previa del infractor y la naturaleza de las sustancias sobre la cual recayó la infracción.*

***Las multas deberán pagarse dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se encuentre firme la respectiva resolución.”.***

El artículo 59 de la ley N° 20.000, con las modificaciones aprobadas por el Congreso Nacional, quedaría redactado de la siguiente manera: ***(En letra más pequeña, en cursiva y negrilla las modificaciones).***

**“Artículo 59.-** La infracción a las obligaciones de registrarse, de mantener inventario y relación de movimientos e informar sobre los mismos cuando la autoridad lo requiera, ***de mantener actualizados los datos en el Registro*** y de informar importaciones y exportaciones, será sancionada con multa de cuarenta a mil unidades tributarias mensuales. El producto de las multas ingresará al fondo especial a que se refiere el artículo 46 de esta ley y se destinará a los fines que allí se contemplan. ***En casos calificados de reincidencia, procederá además la clausura del establecimiento.***

***Para la determinación del monto de la multa se considerará la gravedad de la infracción, la conducta previa del infractor y la naturaleza de las sustancias sobre la cual recayó la infracción.***

***Las multas deberán pagarse dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se encuentre firme la respectiva resolución.”***

Como podemos apreciar de las modificaciones anteriores, ellas tienen como objetivo regular de mejor manera el funcionamiento del Registro, establecer la nueva sanción de clausura del establecimiento y normar tanto la determinación como la aplicación de las multas.

***17. Intercálase en el artículo 63, entre la palabra “sustancias” y la expresión “y especies vegetales”, la frase “, productos que contengan solventes o gases inhalantes”.***

Con esta modificación el artículo 63 de la ley N° 20.000, quedaría con la siguiente redacción: ***(En letra más pequeña, en cursiva y negrilla las modificaciones).***

**“Artículo 63.-** Un reglamento señalará las sustancias, ***productos que contengan solventes o gases inhalantes*** y especies vegetales a que se refieren los artículos 1º, 2º, 5º y 8º; los requisitos, obligaciones y demás exigencias que deberán cumplirse para el otorgamiento de las autorizaciones a que se refiere el artículo 9º, y las normas relativas al control y fiscalización de dichas plantaciones.”

Como hemos visto son 17 las modificaciones normativas que aprobó el proyecto de ley a la ley N° 20.000 que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, enseguida veremos las modificaciones al Código Procesal Penal que plantea el proyecto de ley aprobado, siendo luego de la ley N° 20.000 el segundo cuerpo legal respecto el cual el proyecto de ley plantea más reformas normativas.

**Artículo 2.- Modifícase el Código Procesal Penal de la siguiente forma:**

***“a) Incorpórase un artículo 187 bis, nuevo, del siguiente tenor:***

***“Artículo 187 bis.- Enajenación temprana de especies. A solicitud del Ministerio Público, el juez de garantía podrá disponer la enajenación temprana de los bienes incautados, siempre que se trate de vehículos motorizados, o se trate de bienes sujetos a corrupción, susceptibles de próximo deterioro y cuya conservación sea difícil o muy dispendiosa.***

***Para estos efectos, el juez de garantía deberá oficiar a la Dirección General del Crédito Prendario para que informe sobre la tasación del respectivo bien. En caso de que este deba ser***

***destruido por dicho organismo por carecer de valor, el juez de garantía así deberá decretarlo en la resolución.***

***Si el bien figura inscrito en algún registro público, sea que acredite o no propiedad, el juez de garantía, antes de resolver la enajenación temprana, deberá citar a quienes figuren como titulares de derechos en dichos registros. En caso de que el citado no comparezca a la audiencia de enajenación temprana, se procederá en su ausencia.***

***La enajenación se llevará a cabo por la Dirección General del Crédito Prendario en subasta pública cuando la resolución que disponga la enajenación se encuentre firme o ejecutoriada.***

***El monto de lo obtenido en la subasta será depositado en el Banco del Estado de Chile, en cuentas o valores reajustables y con intereses.***

***En el evento que la sentencia sea absolutoria o no establezca el comiso de las especies enajenadas, el precio de la venta, sus reajustes e intereses serán restituidos a quien corresponda. En caso contrario se destinarán a la Corporación Administrativa del Poder Judicial.”***

Este nuevo artículo que propone incluir el proyecto de ley, quedaría consagrado en el Código Procesal Penal en el párrafo 3º “Actuaciones de la investigación”, del título I “Etapa de Investigación”, correspondiente al Libro Segundo “Procedimiento Ordinario”.

Es importante tener presente, que el artículo previo del Código Procesal Penal corresponde al artículo 187 que regula la incautación de los objetos, documentos e instrumentos que hayan servido o hayan estado destinados a la comisión del delito o que provinieran de él, que sirvan como medios de prueba o se encontraren en el sitio del suceso.

Este nuevo artículo que propone el proyecto de ley regula la enajenación temprana en el Código Procesal Penal, casi en los mismos términos que se incorpora esta “nueva figura jurídica” en la ley Nº 20.000.

En efecto, tal como lo vimos en la modificación Nº 8 a la ley de drogas, que incorpora un nuevo artículo 40 bis a dicha ley, se crea esta nueva figura de la “enajenación temprana”, con las dos únicas diferencias que en dicha ley participa en el proceso el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, que al igual que el Ministerio Público puede pedir al Juez de garantía la “enajenación temprana”, pero en la norma propuesta para el Código Procesal Penal solamente tiene la dicha facultad el Ministerio Público y también cambia la institución a la cual van destinados los dineros de la subasta, en el caso de la ley Nº 20.000 van a un fondo especial del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol y en el caso del Código Procesal Penal a la Corporación Administrativa del Poder Judicial.

***“b) Incorpóranse, en el artículo 466, los siguientes incisos tercero y final, nuevos:***

***“El Consejo de Defensa del Estado podrá tener la calidad de interviniente para todos los efectos de la ejecución de la pena en su aspecto patrimonial y especialmente respecto del cumplimiento del comiso impuesto en la sentencia, haya o no comparecido en la causa respectiva.***

***Sin perjuicio de lo previsto en el inciso precedente y para sus mismos efectos, tratándose de los delitos contemplados en la ley Nº 19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos, y en la ley Nº 20.000, que sustituye la ley Nº 19.366, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, podrán tener, además, la calidad de intervinientes, tanto el Ministerio del Interior y Seguridad Pública como el***

***Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, hayan o no comparecido en la causa respectiva.”.***

El artículo 466 del Código Procesal Penal, se encuentra ubicado en el párrafo 1º “Intervinientes”, del título VIII “Ejecución de las sentencias condenatorias y medidas de seguridad”, del libro IV “Procedimientos especiales y ejecución” de dicho cuerpo legal y en su actual redacción consta de los siguientes dos incisos:

**“Artículo 466.-** Intervinientes . Durante la ejecución de la pena o de la medida de seguridad, sólo podrán intervenir ante el competente juez de garantía el ministerio público, el imputado, su defensor y el delegado a cargo de la pena sustitutiva de prestación de servicios en beneficio de la comunidad, de libertad vigilada o de libertad vigilada intensiva, según corresponda.

El condenado o el curador, en su caso, podrán ejercer durante la ejecución de la pena o medida de seguridad todos los derechos y facultades que la normativa penal y penitenciaria le otorgare.”

Esta modificación legal propuesta en el proyecto de ley, incorpora a más instituciones en calidad de intervinientes.

En primer término, en el nuevo inciso tercero propuesto para el artículo 466 del Código Procesal Penal, incorpora al Consejo de Defensa del Estado “para todos los efectos de la ejecución de la pena en su aspecto patrimonial y especialmente respecto del cumplimiento del comiso impuesto en la sentencia, haya o no comparecido en la causa respectiva”.

En segundo lugar, en la propuesta de incluir un cuarto inciso y final al artículo 466 del Código Procesal Penal, incorpora en calidad de intervinientes para los mismos efectos que incorpora al Consejo de Defensa del Estado en el inciso anterior, esto es para la ejecución de la pena y cumplimiento del comiso, al Ministerio del Interior y Seguridad Pública y al Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, hayan o no comparecido en la causa respectiva, respecto los delitos contemplados en la ley Nº 19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos, y en la ley Nº 20.000.

***c) Incorpórase el siguiente artículo 468 bis:***

***“Artículo 468 bis.- Ejecución de la sentencia en su parte patrimonial. En el caso de los bienes muebles, la copia autorizada de la sentencia ejecutoriada es suficiente para ser presentada ante cualquier tribunal del país que haya decretado alguna medida restrictiva del dominio o prohibición sobre éste, incluyendo los embargos, con el objeto de que sean alzados o cancelados por el solo ministerio de la ley.***

***En el caso de los inmuebles, en virtud de la sentencia ejecutoriada que decreta el decomiso se extinguirán, por el solo ministerio de la ley, los actos y contratos en favor de terceros. Asimismo, el tribunal que decretó el comiso deberá individualizar debida y completamente en la sentencia el inmueble decomisado y remitir copia autorizada de ella al Conservador de Bienes Raíces respectivo, dentro de los diez días hábiles de ejecutoriada la sentencia, para que éste, de oficio, proceda a cancelar gratuitamente toda inscripción anterior que conste en los registros de propiedad, de hipotecas y gravámenes, y de interdicciones y prohibiciones de enajenar, con excepción de las servidumbres legales.***



*Asimismo, el Conservador inscribirá el inmueble a nombre del Fisco de Chile, entendiéndose que el dominio queda radicado en su patrimonio a título originario. El Consejo de Defensa del Estado, en conformidad a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 466, podrá subsidiariamente solicitar al Conservador de Bienes Raíces respectivo la inscripción a nombre del Fisco, exhibiendo copia autorizada de la resolución que decretó el comiso del inmueble.*

*Una vez efectuadas por el Conservador de Bienes Raíces respectivo las cancelaciones, alzamientos e inscripciones referidas en el inciso precedente, deberá remitir copia de dichas inscripciones al tribunal que decretó el comiso, el que deberá oficiar a la Dirección General del Crédito Prendario, acompañando copia de las nuevas inscripciones de propiedad a nombre del Fisco de Chile y copia autorizada de la sentencia, para que ésta proceda a rematarlo en subasta pública.*

*En razón de lo referido en los incisos anteriores, el condenado y toda otra persona carecerán de acción o derecho respecto del dominio, posesión o tenencia del bien objeto del decreto por causa existente con anterioridad a dicho acto.*

*Los notarios, archiveros, conservadores de bienes raíces, el Servicio de Registro Civil e Identificación y demás organismos, autoridades y funcionarios públicos deberán realizar las actuaciones y diligencias y otorgar las copias de los instrumentos que les sean solicitados para efectuar la subasta o destrucción de las especies en su caso, en forma gratuita y exentos de toda clase de derechos, tasas e impuestos.*

*Toda actuación o diligencia previa a la subasta pública que deba efectuar la Dirección General del Crédito Prendario con el objeto de que los bienes queden en condiciones de ser subastados, se efectuará con auxilio de la fuerza pública a solicitud de la referida institución.”.*

Este nuevo artículo 468 bis que propone incorporar el proyecto de ley al Código Procesal Penal quedaría consagrado en el párrafo 2º “Ejecución de las sentencias”, del título VIII “Ejecución de las sentencias condenatorias y medidas de seguridad”, del libro IV “Procedimientos especiales y ejecución” de dicho cuerpo legal.

Previo al examen de la nueva norma legal que propone el proyecto de ley, es importante conocer lo que señala el actual y vigente artículo 468 del Código Procesal Penal, el cual corresponde al artículo previo de la norma aprobada y que regula la ejecución de las sentencias en materia penal.

**“Artículo 468.-** Ejecución de la sentencia penal. Las sentencias condenatorias penales no podrán ser cumplidas sino cuando se encontraren ejecutoriadas. Cuando la sentencia se hallare firme, el tribunal decretará una a una todas las diligencias y comunicaciones que se requirieren para dar total cumplimiento al fallo.

Cuando el condenado debiere cumplir pena privativa de libertad, el tribunal remitirá copia de la sentencia, con el atestado de hallarse firme, al establecimiento penitenciario correspondiente, dando orden de ingreso. Si el condenado estuviere en libertad, el tribunal ordenará inmediatamente su aprehensión y, una vez efectuada, procederá conforme a la regla anterior.

Si la sentencia hubiere concedido una pena sustitutiva a las penas privativas o restrictivas de libertad consideradas en la ley, remitirá copia de la misma a la institución encargada de su ejecución.

Asimismo, ordenará y controlará el efectivo cumplimiento de las multas y comisos impuestos en la sentencia, ejecutará las cauciones en conformidad con el artículo 147,

cuando procediere, y dirigirá las comunicaciones que correspondiere a los organismos públicos o autoridades que deban intervenir en la ejecución de lo resuelto.”

Como podemos apreciar del texto aprobado por el Congreso Nacional que crea este nuevo artículo 468 bis, se viene a regular de mejor manera la ejecución de las sentencias en su ámbito patrimonial, en especial en lo que se refiere a los bienes inmuebles, estableciendo una serie de normas para proceder en definitiva a la subasta de los bienes inmuebles incautados.

**Artículo 3.- Modifícase el artículo 19 de la ley N° 20.502, que crea el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del consumo de drogas y alcohol, y modifica diversos cuerpos legales, de la siguiente manera:**

En primer término es importante señalar que esta ley fue publicada en febrero del año 2011 y además de crear el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, crea el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, correspondiendo a este último organismo las modificaciones aprobadas en el proyecto de ley que veremos más adelante.

Es importante destacar que este Servicio de acuerdo a la ley es un servicio público descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, sometido a la supervigilancia del Presidente de la República por intermedio del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

El proyecto porpone ciertas modificaciones a las facultades de este organismo, las que están reguladas en el artículo 19 de la ley que lo crea.

**1. Sustitúyese el literal j) por el siguiente:**

**“j) Celebrar acuerdos o convenios con instituciones públicas o privadas, nacionales o internacionales, incluyendo las municipalidades, que permitan la ejecución, análisis, evaluación o implementación de políticas, planes y programas de prevención del consumo de drogas y alcohol, así como el tratamiento, rehabilitación y reinserción social de las personas afectadas por la drogadicción y el alcoholismo.”.**

La actual letra j) del artículo 19 de la ley señala textualmente lo siguiente:

j) Celebrar acuerdos o convenios con instituciones públicas o privadas, incluyendo las municipalidades, que digan relación directa con la ejecución de las políticas, planes y programas de prevención del consumo de drogas y alcohol, así como el tratamiento, rehabilitación y reinserción social de las personas afectadas por la drogadicción y el alcoholismo.

Como podemos apreciar de la comparación de la norma actual y vigente con la propuesta en el proyecto de ley, la modificación se refiere básicamente a explicitar que el Servicio pueda celebrar acuerdos o convenios con instituciones internacionales, ya que la norma vigente no lo señala expresamente.

**2. Incorpórase el siguiente literal k), nuevo, pasando el actual literal k) a ser literal l):**

**“k) Administrar los bienes inmuebles incautados que el juez de garantía destine provisoriamente al Servicio, y rendir cuenta de su gestión a dicho juez a lo menos trimestralmente.”.**

Esta modificación propuesta es concordante con la modificación que ya analizamos a la ley Nº 20.000, que el proyecto de ley consigna en su modificación Nº 12 y que se refiere al artículo 46 de la referida ley de drogas.

**Artículo 4.- Intercálase en el artículo 3° de la ley Nº 19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos, entre las expresiones “de bancos extranjeros” y “y las empresas de depósito”, la frase “las automotoras y comercializadoras de vehículos nuevos o usados; las empresas de arriendo de vehículos; personas que se dediquen a la fabricación o venta de armas; clubes de tiro, caza y pesca; personas naturales o jurídicas que se dediquen a la compraventa de equinos de raza pura; comerciantes de metales preciosos; comerciantes de joyas y piedras preciosas”.**

Este organismo fue creado una vez publicada la ley citada el 18 de diciembre de 2003, con el objeto de prevenir e impedir la utilización del sistema financiero y de otros sectores de la actividad económica, para la comisión de una serie de delitos.

Tal como lo señala su ley, este organismo (UAF) corresponde “a un servicio público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que se relacionará con el Presidente de la República por medio del Ministerio de Hacienda.”

La modificación propuesta por el proyecto de ley, se refiere a su artículo 3º donde se regula el deber de informar y específicamente a su inciso primero, donde se enumeran todas las personas naturales y jurídicas que tienen la obligación de informar sobre operaciones sospechosas que adviertan en el ejercicio de sus actividades.

Enseguida se reproduce el texto actual y vigente del inciso primero del artículo 3º de la ley Nº 19.913, incluyendo en letra más pequeña, cursiva y destacada en negrilla la adición que propone el proyecto de ley, que se refiere a incorporar al deber de informar sobre operaciones sospechosas que adviertan en el ejercicio de sus actividades a las automotoras y comercializadoras de vehículos nuevos o usados; las empresas de arriendo de vehículos; personas que se dediquen a la fabricación o venta de armas; clubes de tiro, caza y pesca; personas naturales o jurídicas que se dediquen a la compraventa de equinos de raza pura; comerciantes de metales preciosos; comerciantes de joyas y piedras preciosas.

**“Artículo 3º.-** Las personas naturales y las personas jurídicas que se señalan a continuación, estarán obligadas a informar sobre operaciones sospechosas que adviertan en el ejercicio de sus actividades: los bancos e instituciones financieras; empresas de factoraje; empresas de arrendamiento financiero; las empresas de securitización; las administradoras generales de fondos y las sociedades que administren fondos de inversión privados; las casas de cambio y otras entidades que estén facultadas para recibir moneda extranjera; las emisoras u operadoras de tarjetas de crédito, tarjetas de pago con provisión de fondos o cualquier otro sistema similar a los referidos medios de pago; las empresas de transferencia y transporte de valores y dinero; las bolsas de valores y las bolsas de productos, así como cualquier otra bolsa que en el futuro esté sujeta a la supervisión de la Superintendencia de Valores y Seguros; los corredores de bolsa; los agentes de valores; las compañías de seguros; los administradores de fondos mutuos; los operadores de mercados de futuro y de opciones; las sociedades administradoras y los usuarios de zonas francas; los casinos, salas de juego e

hipódromos; los titulares de permisos de operación de juegos de azar en naves mercantes mayores, con capacidad de pernoctación a bordo, y que tengan entre sus funciones el transporte de pasajeros con fines turísticos; los agentes de aduana; las casas de remate y martillo; los corredores de propiedades y las empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria; los notarios; los conservadores las administradoras de fondos de pensiones; las organizaciones ☐ deportivas profesionales, regidas por la ley N° 20.019; las cooperativas de ahorro y crédito; las representaciones de bancos extranjeros; *las automotoras y comercializadoras de vehículos nuevos o usados; las empresas de arriendo de vehículos; personas que se dediquen a la fabricación o venta de armas; clubes de tiro, caza y pesca; personas naturales o jurídicas que se dediquen a la compraventa de equinos de raza pura; comerciantes de metales preciosos; comerciantes de joyas y piedras preciosas* y las empresas de depósito de valores regidas por la ley N° 18.876; quienes estén inscritos en el Registro de Prestadores de Servicios Financieros y en el Registro de Proveedores de Servicios de Iniciación de Pagos mantenido por la Comisión para el Mercado Financiero y presten los servicios de plataforma de financiamiento colectivo, sistemas alternativos de transacción, custodia de instrumentos financieros, intermediación de esos instrumentos; e iniciación de pagos. Idéntica obligación de reporte tendrán las demás personas naturales o jurídicas que en virtud de cualesquiera de sus giros estén sometidas a la fiscalización de la Comisión para el Mercado Financiero y que voluntariamente hayan solicitado su inscripción en el registro a que se refiere el artículo 40. La inscripción voluntaria antes aludida no podrá ser dejada sin efecto en tanto la persona no haya perdido la calidad de supervisado por esa Comisión.”

**Artículo 5.-** *Sustitúyese el inciso segundo del artículo 22 de la ley N° 19.640, orgánica constitucional del Ministerio Público por el siguiente:*

*“Se creará, al menos, una unidad especializada para asesorar a la dirección de la investigación de los delitos de la ley N° 20.000 que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Así como también de la búsqueda de activos para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 40 y 45 de la ley N° 20.000. Dentro de sus funciones deberá auxiliar a los fiscales adjuntos a la identificación, búsqueda y localización de bienes, instrumentos y ganancias, que se vinculen con la comisión de los delitos sancionados en la ley N° 20.000.”.*

El artículo que propone modificar el proyecto de ley aprobado por el Congreso Nacional, se encuentra en el título II de la ley que crea el Ministerio Público denominado “De la organización y atribuciones del Ministerio Público”, en su párrafo 2º titulado “Fiscal Nacional”, reemplazándose de esta manera el actual inciso segundo del artículo 22 por el texto del proyecto de ley transcrito anteriormente.

En consecuencia, el artículo 22 quedaría redactado de la siguiente manera (en letra más pequeña, cursiva y destacado en negrilla la modificación que propone el proyecto de ley)

**“Artículo 22.-** Cada una de las unidades especializadas a que alude la letra c) del artículo 17 será dirigida por un Director, designado por el Fiscal Nacional, previa audiencia del Consejo General. Estas unidades dependerán del Fiscal Nacional y tendrán como función colaborar y asesorar a los fiscales que tengan a su cargo la dirección de la investigación de determinada categoría de delitos, de acuerdo con las instrucciones que al efecto aquél les dicte.

***Se creará, al menos, una unidad especializada para asesorar a la dirección de la investigación de los delitos de la ley N° 20.000 que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Así como también de la búsqueda de activos para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 40 y 45 de la ley N° 20.000. Dentro de sus funciones deberá auxiliar a los fiscales adjuntos a la identificación, búsqueda y localización de bienes, instrumentos y ganancias, que se vinculen con la comisión de los delitos sancionados en la ley N° 20.000.”***

Con esta modificación, además de actualizarse la referencia que se hace al número de la ley de drogas, se alinea con el espíritu de las modificaciones que propone el proyecto de ley relativo a la incautación y realización de los bienes relacionados con la perpetración de los delitos, así se puede apreciar claramente al reproducir el actual y vigente inciso segundo de este artículo 22, que señala: “Se creará, al menos, una unidad especializada para asesorar en la dirección de la investigación de los delitos tipificados en la ley N° 19.366, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas.”

***Artículo 6.- Incorpórase en el párrafo 9 Ter del Título V del Libro Segundo del Código Penal, sobre normas comunes a los párrafos anteriores, el siguiente artículo 251 septies:***

***“Artículo 251 septies.- En los delitos contemplados en los artículos 248; 250, incisos segundo y tercero, y 251 bis, cuyo beneficio económico o de otra naturaleza provenga de personas naturales condenadas por alguna de las conductas punibles contempladas en las leyes números 19.366, 19.913 y 20.000, la pena deberá ser aumentada en dos grados. Igual agravante se impondrá en el caso de que el beneficio económico o de otra naturaleza provenga de personas jurídicas, cuando cualquiera de sus representantes legales o administradores, y socios en el caso de las sociedades que no sean anónimas, se encuentren en alguna de dichas situaciones.”.***

Este nuevo artículo que el proyecto de ley aprobó incorporar al Código Penal, tipifica una nueva agravante consistente en aumentar la pena de dos grados, respecto las personas que reciban un beneficio económico en el delito de cohecho de acuerdo a los artículo 248 y 250 inciso segundo y tercero del Código Penal y también para el caso del cohecho a funcionarios públicos extranjeros de acuerdo a lo establecido en el artículo 251 del Código Penal, cuando dicho beneficio económico o de otra naturaleza provenga de personas naturales condenadas por alguna de las conductas punibles contempladas en la ley de drogas o en la ley N° 19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activo.

Por último, el proyecto de ley señala que se impondrá la misma agravante cuando el beneficio económico o de otra naturaleza provenga de personas jurídicas y cualquiera de sus representantes legales o administradores, y socios en el caso de las sociedades que no sean anónimas hayan sido condenados por los delitos que se encuentran tipificados en las leyes anteriormente referidas.

#### ***Disposiciones transitorias***

***Artículo primero transitorio.- Los reglamentos de la ley N° 20.000 en los que incidan las modificaciones que esta ley introduce deberán ser actualizados dentro del plazo de tres meses, contado desde su publicación.”.***

***Artículo segundo transitorio.- El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley en su primer año presupuestario de vigencia se financiará con cargo a las partidas presupuestarias Ministerio Público y Ministerio de Hacienda. No obstante lo anterior, el Ministerio de Hacienda, con cargo a la partida***

*presupuestaria Tesoro Público, podrá suplementar dicho presupuesto en la parte de gasto que no se pudiese financiar con tales recursos. Para los años posteriores, el gasto se financiará con cargo a los recursos que se contemplen en las respectivas leyes de presupuestos del Sector Público.”.*

Por último el proyecto de ley aprobado por el Congreso Nacional, establece los dos artículos transitorios reproducidos anteriormente, que se refieren a la actualización del reglamento de la ley N° 20.000 y al financiamiento del mayor gasto fiscal que implica la aplicación de la ley aprobada.

**Fuentes del capítulo:** Proyecto de ley aprobado por el Congreso Nacional, boletín N° 13588-07 denominado “que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de mejorar la persecución del narcotráfico y crimen organizado, regular el destino de los bienes incautados en esos delitos y fortalecer las instituciones de rehabilitación social”; Ley N° 20.000 que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas; Código Penal; Código Procesal Penal; Ley N° 20.502, que crea el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del consumo de drogas y alcohol; ley N° 19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos; ley N° 19.640, orgánica constitucional del Ministerio Público.

### **III.- Consideraciones finales.**

1.- En primer término es importante considerar que el proyecto de ley aprobado por el Congreso Nacional, tal como se da cuenta en los capítulos I y II de este trabajo, esto es la introducción y tramitación legislativa, se concibe a partir de la idea que plantea el proyecto de ley iniciado por moción parlamentaria denominado “Dispone la extinción del dominio sobre los productos e instrumentos del delito, en los casos y en la forma que indica”, Boletín N° 12776-07.

En efecto, es a partir de la tramitación de dicho proyecto que posteriormente el ejecutivo, durante la presidencia de Sebastián Piñera, ingresa el 16 de junio de 2020 un mensaje a la H. Cámara de Diputadas y Diputados, boletín N° 13588-07, mediante el cual plantea modificar diversos cuerpos legales con el objeto de mejorar la persecución del narcotráfico y crimen organizado, regular el destino de los bienes incautados en esos delitos y fortalecer las instituciones de rehabilitación social.

2.- El fundamento principal del proyecto de ley iniciado por moción parlamentaria, dice relación con combatir el narcotráfico, ya que esta actividad ilícita supone una gran acumulación de riqueza por parte de las personas que se dedican a ella, siendo en consecuencia muy atractivo desde el punto de vista patrimonial.

La moción plantea la necesidad de contar con un proceso civil paralelo al proceso penal que permita recuperar de manera eficiente los bienes producto de los delitos, siendo de esta manera el comiso un instrumento jurídico de prevención general, dirigido a desincentivar y desestimular las actividades delictivas, especialmente de aquellas de motivación económica como el narcotráfico.

La referida moción plantea que el proyecto de ley crea la institución de la extinción del dominio basado en la Ley Modelo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito a través de un articulado independiente de otro cuerpo legal. En consecuencia, no modifica disposición alguna de la legislación vigente.

En este sentido es importante recordar lo que señaló en su parte pertinente la Excm. Corte Suprema a propósito de la consulta que le hace la Cámara baja de un artículo

del proyecto, respondiendo textualmente que: “Cabe tener en cuenta que el proyecto tanto en su articulado como en su redacción, es prácticamente idéntico al ofrecido como parámetro en la “Ley Modelo sobre Extinción de Dominio”, del Programa de Asistencia Legal para América Latina y el Caribe, con algunas modificaciones menores, especialmente en relación a la realidad institucional nacional. Por este motivo, como es previsible, contiene múltiples ámbitos que, además de resultar discutibles, requieren de importante trabajo legislativo con el fin de compatibilizarlos con el estado actual de la regulación nacional en la materia.”

3.- En relación al proyecto de ley enviado a la Cámara baja en el último gobierno del Presidente Sebastián Piñera, el fundamento principal de dicho proyecto es el “Combate frontal al narcotráfico y al crimen organizado”.

Este mensaje del ejecutivo a diferencia de la moción parlamentaria y en concordancia con lo sugerido por la Excma. Corte Suprema, propone modificaciones a diversos cuerpos legales y no una ley especial donde se regule la materia, abordando además el mensaje presidencial y en definitiva la ley aprobada otros cambios normativos además del tema del comiso.

4.- Como vimos en el capítulo II, el proyecto de ley tuvo una tramitación muy extensa, modificando, agregando y eliminado algunos elementos del proyecto de ley del ejecutivo e incluso al no haber un total acuerdo entre lo aprobado por ambas Cámaras se debió ir a una Comisión Mixta, la cual en definitiva zanjó las diferencias y el informe de dicha Comisión fue aprobado este mes por la H. Cámara de Diputadas y Diputados y el Senado, siendo remitido posteriormente al ejecutivo el correspondiente oficio dando cuenta de esta situación con el texto del proyecto de ley aprobado.

5.- Entre las figuras jurídicas más relevantes que fueron aprobadas por el Congreso Nacional, podemos destacar en la nueva redacción del artículo 40 de la ley N° 20.000 que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, la “**destinación provisoria**” de los bienes muebles e inmuebles incautados de los delitos, añadiendo la posibilidad de destinarlos a unidades policiales y manteniendo la posibilidad de destinarlos, pero “provisionalmente” a instituciones del estado o previa caución a una institución privada sin fines de lucro que tenga como objetivo la prevención del consumo indebido, el tratamiento y la rehabilitación de las personas afectadas por la drogadicción, o el control del tráfico ilegal de estupefacientes.

6.- En el nuevo artículo 40 bis que se agrega a la ley N° 20.000, se crea la figura jurídica de la “**enajenación temprana**” de los bienes incautados, señalándose expresamente en esta nueva normativa a los vehículos motorizados, o bienes respecto de los cuales existan antecedentes de que continúan siendo utilizados en actividades ilícitas y al igual que el actual artículo 40 a los bienes sujetos a corrupción, susceptibles de próximo deterioro, cuya conservación sea difícil o muy dispendiosa.

También con la nueva legislación aprobada por el Congreso Nacional, el Juez de Garantía podrá disponer dicha enajenación ya no solamente por la solicitud del Ministerio Público, sino que además por petición del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol.

Además es importante relevar, que este nuevo artículo mantiene la disposición que si no se establece en la sentencia el comiso de los bienes, el dinero de la venta, junto con sus reajustes e intereses serán restituidos a quien corresponda, manteniéndose para esos efectos el monto de lo obtenido en la subasta en el Banco del Estado de Chile en cuentas o valores reajustables y con intereses, cuestión esta última que no establece la actual legislación.

Es relevante señalar que el proyecto aprobado regula también la enajenación temprana en el Código Procesal Penal en su nuevo artículo 187 bis, casi en los mismos términos de la ley N° 20.000.

En efecto, las dos únicas diferencias son que en la ley N° 20.000 participa en el proceso el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, que al igual que el Ministerio Público puede pedir al Juez de garantía la “enajenación temprana”, pero en la norma aprobada para el Código Procesal Penal solamente tiene la dicha facultad el Ministerio Público y también cambia la institución a la cual van destinados los dineros de la subasta, ya que en el caso de la ley N° 20.000 van a un fondo especial del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol y en el caso del Código Procesal Penal a la Corporación Administrativa del Poder Judicial.

**7.-** Por último es muy relevante como vimos en su oportunidad, destacar las modificaciones aprobadas al artículo 45 de la ley N° 20.000, en especial con los seis incisos nuevos que agrega a este artículo, los cuales guardan directa relación con los objetivos que buscaba el proyecto de ley iniciado por moción al que nos hemos referido en el presente informe.

En efecto, el tratamiento del **comiso** con las modificaciones aprobadas por el Congreso Nacional, modifica sustancialmente esta institución jurídica para los delitos tipificados en la ley N° 20.000, modernizando su regulación de acuerdo a las nuevas tendencias que han sido adoptadas en la legislación comparada, en especial, con la posibilidad de poder decretar el comiso independientemente que la sentencia en definitiva absuelva o sobresea al acusado.

Es todo cuanto puedo informar, 28 de marzo de 2023.

**Carlos Lobos Mosqueira**  
**Abogado**